



TRIBUNAL
SANCIONADOR

Fecha: 04/07/2018
Hora: 15:05
Lugar: Antiguo Cuscatlán, La Libertad

Referencia: 785-13

RESOLUCIÓN

Documentos que anteceden: El día 28/09/2017 se recibió escrito firmado por el licenciado, por medio del cual incorpora fotocopia certificada de poder especial judicial. Al respecto es pertinente tener por actualizada la personería con la que interviene en el presente procedimiento el referido profesional, y por subsanada la prevención hecha en resolución de folios 139.

I. INTERVINIENTES

Consumidor denunciante: S.A. de C.V.

Proveedor denunciado: S.A.

II. HECHOS DENUNCIADOS

La sociedad consumidora manifestó en su denuncia que el día 7/08/2012, fue objeto de hurto del automóvil placas, marca NISSAN, modelo Pathfinder, año dos mil seis, color gris claro metálico, el cual estaba asegurado, con la póliza número A- posee sistema "GPS", cobertura por robo y hurto total o parcial; por lo que interpuso la respectiva denuncia a la Fiscalía General de la República, así como el reclamo ante la aseguradora, la cual mediante nota del 10/08/2012, le denegó la cobertura, debido a que calificó el hecho como apropiación indebida, con lo que no está de acuerdo, pues la denuncia se recibió bajo el delito de hurto, lo que se hizo del conocimiento de la aseguradora, mediante nota remitida por la Fiscalía General de la República.

III. PRETENSIÓN PARTICULAR

La consumidora solicitó que el proveedor le hiciera efectivo el seguro total, por el hurto del automóvil descrito en la denuncia.

IV. INFRACCIÓN ATRIBUIDA

La infracción regulada en el artículo 43 letra e) de la Ley de Protección al Consumidor (en adelante LPC).

V. CONSIDERACIONES

1. Como punto de partida de la valoración que ha de hacer este Tribunal sobre el caso de autos, al haberse sustanciado ya hasta este punto, es necesario determinar —a partir de los hechos denunciados—, si entre la denunciante y la proveedora efectivamente existe una relación jurídica en virtud de la cual resulte aplicable el entorno normativo que a este Tribunal compete, consistente en sancionar o absolver a la proveedora por la transgresión de la LPC.

El ejercicio de la potestad sancionatoria de la Administración Pública, regulada en el artículo 14 de la Constitución de la República, se encuentra sometido a específicos y singulares requisitos y garantías procedimentales, así como a principios propios relativos al ejercicio de esa potestad, la cual encuentra su límite máximo en el mandato de legalidad que recoge el inciso último del artículo 86 que establece: "*Los funcionarios del gobierno son delegados del pueblo y no tienen más facultades que las que expresamente les da la ley*".

Esto implica que debe hacerse una valoración y análisis fundamentado en el ordenamiento jurídico, precisamente para salvaguardar la seguridad jurídica en la promulgación de actos administrativos emanados de la Autoridad Pública competente.

2. El artículo 1 de la LPC establece que el objeto de la misma es proteger *los derechos de los consumidores, a fin de procurar el equilibrio, certeza y seguridad jurídica en sus relaciones con los proveedores.*

Por su parte, el artículo 2 regula el ámbito de aplicación de la ley en comento de la siguiente manera: *"Quedan sujetos a esta ley todos los consumidores y los proveedores, sean estos personas naturales o jurídicas en cuanto a los actos jurídicos celebrados entre ellos, relativos a la distribución, depósito, venta, arrendamiento comercial o cualquier otra forma de comercialización de bienes, o contratación de servicios"*.

Así, en principio y por regla general, es menester aclarar que, evidentemente, la Ley de Protección al Consumidor se aplica en todas las relaciones comerciales —transacciones entre compradores y vendedores para adquirir productos o servicios a cambio de un precio, tasa o tarifa—, pero *con la finalidad de proteger a los consumidores*, ya que éstos, al adquirir bienes y servicios, *pueden encontrarse en una posición desigual o asimétrica frente al proveedor.*

Y es que, si algo caracteriza especialmente al derecho de consumo es precisamente su *finalidad protectora a un ámbito concreto de personas: los consumidores y usuarios.* Así, la doctrina es unánime en reconocer el *carácter tuitivo* del referido derecho, estableciendo que, dicho carácter, es la razón que justifica su existencia, comparando la relación *consumidor-proveedor* con la de *trabajador-empleador.*

Así, el concepto de relación de consumo expresado por el artículo 2 de la LPC tiene dos elementos: uno objetivo y el otro subjetivo. Según el primero, quedan comprendidos en el ámbito de la ley los actos jurídicos relativos a la distribución, depósito, venta, arrendamiento o cualquier otra forma de comercialización de bienes o servicios. El otro elemento, que es el subjetivo, exige que en una relación contractual sujeta al ámbito de la ley de consumo una de las partes tenga calidad de proveedor y la otra de consumidor.

3. Para el caso en análisis, los hechos denunciados tienen como base el incumplimiento de contrato de seguro de automotor, por el supuesto hurto de un vehículo propiedad de la denunciante, que ésta afirmó estaba asegurado con la póliza número A- a su favor.

Entre la documentación presentada en el procedimiento, consta la fotocopia del contrato de póliza de seguros de automotores número A- agregada de folios 26 al 56, de la cual se advierte que, si bien la denunciante y la proveedora tienen una relación comercial, **el vehículo objeto de la denuncia no figura dentro de los automotores asegurados en dicha póliza.**

De lo anterior, puede colegirse que respecto de los hechos denunciados por S.A. de C.V., no se logró acreditar el elemento objetivo de la relación contractual como lo exige la LPC, para que este Tribunal pueda emitir pronunciamiento por infracciones a la Ley de Protección al Consumidor, en relación a no prestar los servicios en los términos contratados.

En conclusión, al no estar probada la relación contractual que motiva el incumplimiento atribuido a la proveedora —presupuesto para entrar a analizar el fondo de la denuncia presentada—, es procedente concluir el presente procedimiento de forma irregular y anticipada a una decisión de fondo.

VI. DECISIÓN

Por tanto, sobre la base de lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 11, 14 y 101 inciso segundo de la Constitución de la República, 2, 3, 40, 83 letra b) de la Ley de Protección al Consumidor, y 94 del Reglamento de la Ley de Protección al Consumidor, este Tribunal **RESUELVE:**

Sobreseer a la proveedora ., S.A., de la infracción regulada en el artículo 43 letra e) de la LPC, en relación a los hechos denunciados por S.A. de C.V., por los fundamentos legales antes expuestos.

Notifíquese.

INFORMACIÓN SOBRE RECURSO

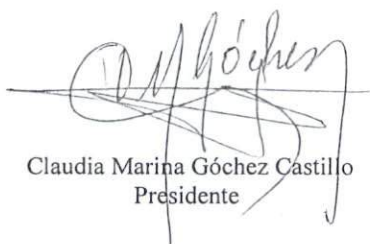
Recurso procedente: Revocatoria.

Plazo para interponerlo: 3 días posteriores a la notificación de la presente resolución.

Lugar de presentación: Oficinas Tribunal Sancionador, edificio Defensoría del Consumidor, quinto nivel, Calle Circunvalación, N° 20, Plan de la Laguna, Antiguo Cuscatlán, La Libertad.

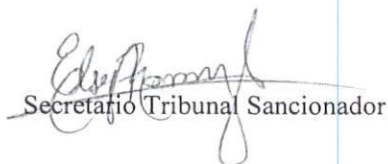
Autoridad competente: Tribunal Sancionador de la Defensoría del Consumidor.

PRONUNCIADA POR LOS MIEMBROS DEL TRIBUNAL SANCIONADOR DE LA DEFENSORÍA DEL CONSUMIDOR.


Claudia Marina Góchez Castillo
Presidente


Mario Antonio Escobar Castaneda
Primer Vocal


Óscar Gilberto Canjura Zelaya
Segundo Vocal


Secretario Tribunal Sancionador